

que su hijo Amado no ha podido consentir en ser soldado, porque como menor de 16 años, y como hijo legítimo, su voluntad sin la de su padre no es legal en el caso; y manifestada su resistencia á seguir en el servicio militar y la que siempre ha opuesto el quejoso, la retención en ese servicio que hace á aquel joven la comandancia general de la plaza de Puebla, es una violación de la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución de la República mexicana. Visto el informe de la comandancia contra cuyo acto se dirige la queja y el producido por el Cefe del cuerpo núm. 15 referido; las pruebas rendidas; el pedimento del Promotor fiscal; lo alegado por el quejoso y la sentencia del juez de Distrito de Puebla en la que concede el amparo de la Justicia federal solicitado en el presente juicio, por cuanto á que de autos consta justificado que las razones de que se hace proceder tal recurso, es que los hechos son ciertos y en el derecho decisivos, demostrando la violación de garantía que el promovente ha reclamado.

Por los fundamentos del juez y con apoyo de la ley de 20 Enero de 1869 se resuelve lo siguiente: es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció en Puebla á 15 de Octubre próximo pasado declarando que la Justicia de la Union ampara y protege al O. Antonio García Mozqueira contra el hecho de haber sido afiliado su hijo Amado García y Martel en el cuerpo de caballería núm. 15.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—

Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—I. Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia. México, Noviembre 13 de 1872.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por D. Benito Hernández Loredó, a nombre de sus menores hijas Rosa, María, Florencia y María de la Luz Lucía, contra el juez 2º de 1ª instancia de ese Canton, que remató en una cuarta parte de su valor los lotes D. y C. del exconvento de la Merced de aquella ciudad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que en el juicio de protección y amparo promovido por el O. Benito Hernández Loredó en representación de sus menores hijas legítimas Rosa, María, Florencia y María de la Luz Lucía, contra providencias dictadas por el C. juez 2º de 1ª instancia de este Canton en el juicio ejecutivo que contra el quejoso sigue el O. Francisco de P. Milán, violándoles garantías que la Constitución Federal les concede con relación á su propiedad y posesión, se reservó pedir lo que fuere de justicia, con vista de las pruebas que rindiera la parte promovente; sin haber hecho observación alguna respecto á la procedencia de este juicio, por haberlo considerado comprendido expresamente en la fracción 1ª del art. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 y art. 101 y 102 de dicha Constitución.

Esas disposiciones en su texto y sentido genuino, no hacen distinción alguna respecto de los casos judiciales en que no deba ser procedente el juicio de am-

paro, pues se advierte que todos están comprendidos en ellas porque se refieren "á toda controversia que se suscite, por "leyes ó actos de cualquiera autoridad "que violen las garantías individuales, "debiendo la sentencia ocuparse precisa- "mente de individuos particulares, limi- "tándose á protegerlos y ampararlos en "el caso especial sobre que verse el pro- "ceso y sin hacer ninguna declaracion "general en cuanto á la ley ó acto que "la motivare." Por consiguiente, si ese acto consiste en una sentencia ejecuto- riada que es el mas firme y respectable de los que forman un juicio, está com- prendido sin embargo en la disposicion general y terminante del art. 101 porque su letra no lo excluye en sus términos bien claros; y si se trata de otro acto que consiste en un auto ó derecho de un Juzgado que no causa ejecutoria, por tener otros recursos legales por medio de los cuales pueda obtenerse la reparacion del perjuicio causado en él, en un juicio que se siga entre individuos particulares, ya sea ante los tribunales del Estado ó ya ante los de la federacion, tambien está comprendido en el citado art. 101 y es- pecialmente en el 102 que terminante- mente dispone: "que la sentencia solo se ocupe de individuos particulares" y no de autoridades, corporaciones y funcio- narios públicos, siendo esta la razon, sin duda alguna, porque la Suprema Corte ha conocido ya de mas de treinta juicios de amparo que se han ofrecido en nego- cios judiciales, expidiendo otras tantas ejecutorias y haciendo punto omiso del art. 8º de la ley orgánica por no emanar este de los ya relacionados artículos 101 y 102 de la Constitucion, de conformidad con lo prevenido en el 126 de la misma, cuyas ejecutorias se encuentran publica- das en el "Semanario Judicial" de la fe- deracion; siendo de notar que en ellos se han observado juicios de todas clases y circunstancias.

Por tales razones y no habiendo ley

alguna que prohiba expresamente á los tribunales federales considerarse priva- dos de su jurisdiccion en ningun caso de los que se ofrecen con relacion á negocios judiciales; y debiendo por otra parte fun- dar sus fallos en ley expresa, determinan- do con claridad en la parte resolutive ca- da uno de los puntos controvertidos con arreglo á la de 28 de Febrero de 1861, no puede dejarse de admitir todo recurso de amparo contra cualquier acto de au- toridad judicial, sea cual fuere el negocio á que se contrae y las circunstancias que en él concurren, porque "cuando la ley no distingue, los hombres no deben dis- tinguir", segun el principio de derecho, mayormente cuando la verdadera mision de los jueces es aplicar las leyes á los ca- sos ocurrentes, sin interpretarias.

Es evidente por lo mismo que en el pre- sente caso tienen legítima jurisdiccion los Tribunales Federales para conocer, y por tanto, pasa el suscrito Promotor á examinar los hechos y cuestiones de de- recho que en él se ventilan, para pedir con vista de lo actuado lo que correspon- da en justicia, sobre si debe ó no ampa- rarse á las hijas menores del quejoso.

Aparece justificado que á consecuen- cia de la demanda ejecutiva establecida por el apoderado del C. Francisco de P. Milan, ante el C. juez 2º de 1ª instancia de este Canton, contra las hijas del C. Benito Loredó, en cobro de dos mil pe- sos y réditos, se les embargaron los bie- nes raíces que poseian como dueñas, va- liendo estos segun la graduacion que te- nia hecha la Administracion principal de Rentas para el pago de contribuciones, la cantidad de diez mil pesos, cuyos bie- nes fueron vendidos en pública almone- da en dos mil quinientos, que ofreció un postor que se presentó sin haber tenido competidor que le pujara en ese acto, ha- biendo sido calificada y admitida la pos- tura por el acreedor y fincado el remate por disposicion del juez del conocimien- to, aplicando al caso lo dispuesto en el

art. 822 del Código de procedimientos del Estado.

Este artículo dice lo siguiente: "Cuando para ejecutar los convenios que terminen un juicio verbal ó la respectiva sentencia, se deba proceder á la venta de algunos bienes, embargados estos en el orden establecido en el art. 784, en sus casos, se anunciará aquella al público sin necesidad de valúo, por seis días si fueren muebles ó veinte siendo raíces, señalándose al vencimiento de esos términos, por nuevo anuncio, día para la almoneda y hora para el remate. Este se hará en el mejor postor, calificándose las posturas por el actor en cuanto á la parte que baste para cubrir su crédito. En los casos de convenio puede tambien convenirse en los términos de la venta."

El 823 dice lo siguiente: "Cuando lo embargado exceda en mas de otro tanto del valor que se demanda, podrá venderse solo una parte si admitiere cómoda division. No admitiéndola, el postor se arreglará con el deudor en cuanto al resto, y si no se obtuviere este arreglo el juez decidirá lo que crea conveniente para conciliar los derechos del acreedor con el menor perjuicio posible del deudor." Esta última disposicion completa la del anterior artículo para que en los casos de remate por el cobro de alguna deuda no se perjudique el deudor de un modo considerable, facultando la ley al juez para que decida lo que crea conveniente, como se expresa terminantemente en el mismo art. 823.

Está justificado igualmente por lo informado á fojas diez que el C. juez 2º de 1ª instancia procedió con arreglo al 822, sin haber dictado providencia alguna que salvara los intereses perjudicados de las menores hijas del C. Loredó en el remate que se verificó, como pudo haberlo hecho muy bien, atendiendo á las circunstancias excepcionales y especiales del caso, pues á simple vista y en aquel momento debió comprender por los datos

acumulados, que el perjuicio importaba tres cuartas partes del valor de los bienes embargados, supuesto que despues de la compra hecha de la finca al C. Milan de donde procedia la deuda, fué mejorada con la edificacion de una casa que se levantó y por cuyo motivo fué graduada toda la posesion en diez mil pesos.

Tambien está probado por el avalúo que se ha hecho en este juicio para acreditar su verdadero precio, que importa este once mil doscientos cincuenta y seis pesos cincuenta centavos resultando vendidos los bienes embargados en menos de la cuarta parte de lo que realmente valen.

Si como aparece por lo que ordena el art. 822, está expuesto un deudor á sufrir la pérdida de sus bienes, aunque sean cuantiosos con tal de que haya un postor que ofrezca algo por ellos y lo ofrecido baste para cubrir el crédito que se le reclame en juicio, siendo así que la ley permite que se proceda al remate sin previo avalúo, lo cual importa un verdadero ataque á la propiedad y posesion legítimas, garantizadas por la Constitucion Federal, no es menos cierto que los jueces están ampliamente facultados por el art. 823, para remediar el mal donde quiera que lo encuentren, pues no es posible concebir que el legislador haya querido favorecer tanto al que cobra un crédito legítimamente aunque sea de corta cantidad, que disponga la ruina ó aniquilamiento de los intereses del deudor, cuando por cualquiera circunstancia se encuentra en el caso angustiado de las menores hijas del C. Loredó; y siendo esto así, como resulta demostrado en estas actuaciones, es necesario asentar que el C. juez contra cuyos actos se han quejado, no solamente violó las garantías que al hombre conceden los artículos 16 y 27 del Pacto Fundamental de la República, en las personas y bienes de dichas menores, con la inobservancia del repetido art.

823 del Código de procedimientos del Estado, sino que tampoco acató y cumplió lo prevenido expresamente en el 126 de la Constitución Federal, que comparada en lo relativo á las garantías expresadas con lo que dispone el art. 822 del Código citado, al que se arregló exclusivamente el C. juez 2º, era de tomarse en consideración antes que aquel en la administración de justicia.

Por cuyos fundamentos y no habiendo motivado legalmente su procedimiento la autoridad que mandó fincar el remate en los bienes embargados de que se trata con notable perjuicio de las interesadas, pide al Juzgado se sirva

Primero: amparar y proteger á nombre de la Justicia de la Nación á las menores Rosa, María, Florencia y María de la Luz Lucía, respecto de la venta en pública subasta que hizo de sus bienes importantes once mil doscientos cincuenta y seis pesos cincuenta centavos, el C. juez 2º de 1ª instancia de este Canton, en la cantidad de \$ 2,500 para el pago de un crédito que no llega á esta cifra.

Segundo: que pronunciado el fallo se eleven los actos á la Suprema Corte en revision.

"Heróica Veracruz, 26 de Enero de 1872.—Lic. J. M. López de Escalera."

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

"Heróica Veracruz, Octubre 4 de 1872.—Visto este juicio sobre protección y amparo promovido por el C. Benito Fernandez Loredó, vecino de esta ciudad, en representación de sus hijas legítimas menores Rosa, María, Florencia y María de la Luz Lucía Fernandez Loredó, contra providencias dictadas por el C. juez 2º de 1ª instancia de este Canton, en el juicio promovido por el

C. Francisco de Paula Milan, -contra bienes de las expresadas menores en cobro de cantidad de pesos, autorizando el remate de dichos bienes por la cuarta parte de su valor, con violación de las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal; el informe producido por la autoridad ejecutora del artículo reclamado y lo pedido por el C. Promotor fiscal con el auto que le recayó sobre suspensión inmediata de dicho acto, mediante el perjuicio que pudiera resultarle en el caso de que fuesen amparadas; el nuevo informe de la misma autoridad en que á la vez de confesar los hechos que se relacionan en el ocuso, trata de legalizarlos con la observancia del art. 822 del Código de procedimientos del Estado; lo pedido por el C. Promotor fiscal y por el quejoso en sus respectivos alegatos con vista de las pruebas producidas en este juicio entre las que se encuentra el avalúo practicado de los bienes rematados; lo manifestado en favor de los derechos del C. Milan, por sus respectivos apoderados hallándose las actuaciones en estado de sentencia, cuya audiencia fué admitida por equidad, y todo lo demas que ver y considerar convino; Considerando: que el enunciado C. juez al proceder á la venta de los lotes embargados al C. Benito Fernandez Loredó, como representante de sus hijas menores, si bien lo hizo sujetándose á lo dispuesto en el citado art. 822 del Código de procedimientos, no tuvo cuidado de cumplir lo prevenido en el 823, omitiendo la decision oportuna para conciliar los derechos del acreedor con el menor perjuicio posible del deudor; que esa omision dió lugar á que el comprador de los bienes redujera sus posturas sucesivamente de los dos lotes en que fueron divididos á la cuarta parte de su valor con perjuicio notable de las propietarias que no contaban con otros recursos para sus alimentos que el pro-

ducto de esas fincas, quedándose en la indigencia para lo futuro por satisfacer un crédito relativamente insignificante ó de poca cuantía comparado con el valor actual de aquellas: que para su venta en pública almoneda se ha omitido el justo precio legal por medio de peritos para que sirviera de base y de regla segura si se enajenaban en sus dos tercios como ha sido de práctica constante autorizada en todos los Tribunales de la República, cuya medida sirve también de salvaguardia contra los abusos que suelen cometerse en las ejecuciones al deudor que por desgracia no le ha sido posible satisfacer sus obligaciones; que está justificado que con otros bienes de las mismas menores se hicieron mejoras de consideracion en uno de los lotes indicados, las mismas que tampoco han sido apreciadas en el remate verificado; que el art. 822, observado aisladamente como lo ha sido en este caso, importa realmente un ataque á la propiedad y á la posesion legítima garantizadas por la Constitucion Federal, pues que permite que finque el remate por lo que ofrezca cualquier postor, con tal de que baste para cubrir el crédito que se reclame, de cuya disposicion resulta tambien el absurdo muy trascendental de que en el caso de venderse una finca valiosa que no se pueda dividir se admitiria la postura que importase una parte mínima de su valor, sufriendo el propietario la pérdida considerable de sus intereses ó bienes patrimoniales que le sirven para el sustento de su familia; que por lo tanto el procedimiento de que se trata que no se ajustó tampoco á lo terminantemente prevenido en el art. 126 de la Constitucion Federal, ha violado las garantías individuales que otorga la misma en sus artículos 16 y 27 en los bienes que legítimamente poseian como de su propiedad las menores hijas del quejoso; por cuyos fundamentos y los demas que

extensamente ha explanado el O. Promotor fiscal para demostrar la procedencia de este juicio, y en virtud de lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la propia Constitucion y ley de 20 de Enero de 1869, en lo que fuere conforme á aquella, este Juzgado falla:

1º La Justicia Federal ampara y protege á las hijas menores de D. Benito Fernandez Loredó, contra las providencias dictadas por el O. Juez 2º de 1ª instancia de este Canton, autorizando el remate de sus bienes por la cuarta parte de su valor y sin el previo justiprecio de ellos.

2º Notifiquese este fallo: sáquense las copias que previene la ley para el Periódico oficial del Estado y Semanario judicial de la Federacion, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo mandó y firmó el O. juez de Distrito del Estado: lo certificamos.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia. Heroica Veracruz, Octubre 10 de 1872.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 5 de 1872.—Visito el juicio de amparo promovido ante el juez de Distrito de Veracruz, por D. Benito Fernandez Loredó, como padre de sus menores hijas Rosa, María, Florencia y María de la Luz Lucía, contra el O. juez 2º de 1ª instancia de ese Canton, que remató en una cuarta parte del precio de su valor, los lotes D. y C. del ex-convento de la Merced de aquella ciudad, los que compró el quejoso á D. Francisco P. Milan, con cuyo acto considera aquel violadas las garantías á que

se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, y considerando: Que si el juez 2º de 1ª instancia del cantón de Veracruz procedió al remate, sujetándose á lo dispuesto en el art. 822 del Código de procedimientos del Estado, sin observar lo que dispone el artículo siguiente del mismo Código, el mal que con esa conducta se produzca puede remediarse usándose de los recursos legales propios de la naturaleza del juicio en que se procedió al remate; y que en el caso no puede decirse con propiedad que se han violado las garantías á que el quejoso se refiere, se decreta: Que se revoca el auto pronunciado el 4 del mes próximo pasado, por el juez de Distrito de Veracruz que otorgó el amparo, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Benito F. Loredó como padre de sus menores hijas, contra el acto del juez 2º de 1ª instancia del cantón de Veracruz, que procedió al remate de los lotes D. y O. del exconvento de la Merced de la misma ciudad, los que compró el quejoso á D. Francisco P. Milan.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que preceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.

—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 8 de 1872.—Lic. Agustín Peraltá, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por José Ponciano, contra la determinación del comandante militar del Distrito Federal, por la cual fué consignado el quejoso al servicio de las armas.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por José Ponciano, quejándose de que siendo menor de diez y seis años, huérfano de padre y madre y sosteniendo con su trabajo á tres hermanas menores, fué entregado por la prefectura de Texcoco á un jefe militar por cuenta del contingente, y dado de alta contra su voluntad en el batallón núm. 4, violándose en su persona las garantías que le concede el art. 5º de la Constitución y los de la ley de 17 de Mayo último. Recibido el juicio á prueba, presentó el certificado del Alcalde de Chautla, de donde es vecino el quejoso, que comprueba su dicho. Como la autoridad informante conviene tambien en la forma como se hizo la consignación, admitiendo el hecho de que los Estados deben ministrar el contingente para el ejército nacional, el que deben formarlos ciudadanos de toda la República, y no únicamente los hijos del Distrito Federal, este debe reunirse por las autoridades subalternas de los Estados; mas el envío al gobierno general no debe tener lugar sino directamente de los gobernadores, y eso suponiendo que las personas que forman el contingente no tengan las excepciones legales que obran en el presente caso.

Por lo expuesto puede el Juzgado declarar, que la Justicia Federal ampara y protege al C. José Ponciano.

México, Octubre de 1872.—Herrera Campos.